



DECLARACIÓN DE SANTA MARTA
“La región, unida por el cambio”

Santa Marta, Colombia, 10 y 11 de noviembre del 2022

El Grupo de Puebla une a mujeres y hombres de América Latina y del Caribe con firmes convicciones en favor de la paz, la democracia social y sostenible, la lucha contra la pobreza, por la igualdad y un orden internacional de cooperación y solidaridad. El VIII encuentro de este foro de debate de ideas y de solidaridad se ha logrado abrir un espacio amplio de cooperación y puesta en común de una gran pluralidad de posiciones, en un ambiente amable y de unidad que fortalece a todas las opciones progresistas de nuestros países.

En los últimos años, América Latina se enfrentó a la peor crisis económica de su historia por cuenta de la pandemia. La coyuntura dejó un saldo de muertes revelador sobre las vulnerabilidades sociales y económicas que hoy padecemos. De acuerdo con la CEPAL, con un 8% de la población mundial, el porcentaje de fallecimientos en América Latina llegó al 34% del total global. A esto se suman los 45 millones de empleos que se sacrificaron durante la prolongada crisis agravada por el desmonte en décadas anteriores, de los esquemas de protección social que dejaron a los Estados desprovistos de mecanismos públicos para proteger a su población.

Las mujeres latinoamericanas sufrieron particularmente, pues durante el confinamiento vivieron la pandemia en la sombra por cuenta de la violencia de género. Según ONU MUJERES una de cada tres mujeres en el mundo, sufre violencia sexual o física, en la mayoría de los casos por parte de su pareja, con lo cual, mujeres y niñas quedaron encerradas con sus potenciales agresores. En la coyuntura quedaron al desnudo las vulnerabilidades y la desproporcionalidad en las tareas y sus contribuciones en la economía del cuidado invisibilizadas injustamente.

Con perspectivas de recuperación y gracias al crecimiento post Covid surgió una esperanza moderada en medio de muchas carencias que fue interrumpida por la Guerra en Ucrania. El conflicto en Europa ha tenido efectos nefastos sobre la economía del Sur Global, incluida América Latina y el Caribe. El número de personas que padecen hambre en el mundo actualmente asciende a los 828 millones de personas según las advertencias de la FAO. En 2021, casi 60 millones de personas corren el riesgo de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Este año, se advirtió

sobre la posibilidad de que en Haití unos 4,7 millones estuvieran bajo ese factor de riesgo. La situación en esa nación caribeña está lejos de resolverse mientras los más vulnerables sufren por cuenta de la violencia y la inestabilidad política, desatendida en los últimos años por buena parte de los actores institucionales multilaterales, en especial de la Organización de Estados Americanos

La región viene de un panorama adverso, la época del llamado “invierno conservador (2016-2021)”, por lo que buena parte del electorado ha optado por gobiernos progresistas, alentados por los movimientos sociales, el activismo juvenil, el despertar feminista, la necesidad inaplazable de recuperar esquemas de protección social, la garantía de acceso a derechos económicos y sociales y por la coincidencia en que se debe procurar un desarrollo sin alterar los equilibrios ambientales. El proyecto político de Puebla apunta, por ello, hacia una profundización de la democracia social, ambiental, participativa y local.

Cuando apenas restan poco más de 7 años para que culmine el plazo fijado para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las asimetrías, carencias, brechas laborales, de género, rurales -y ahora digitales- siguen marcando a América Latina y el Caribe. Por eso el Grupo de Puebla incorpora a las mujeres, jóvenes, movimientos sociales, pueblos indígenas, y gobiernos locales como sujetos activos de este cambio y se alimenta de las luchas sociales que llevaron al progresismo al poder. La reducción de esas brechas es un objetivo inaplazable.

Soplan nuevos vientos ...

Por fortuna, en estos meses llegan buenas noticias desde las urnas. Por primera vez en la historia, el progresismo gobierna en Colombia con Gustavo Petro, luego de experiencias exitosas de la izquierda en el nivel local o subnacional lo cual es más significativo tomando en cuenta que, cuando se produjo el primer ciclo de progresista al comienzos de siglo, Colombia fue de las pocas excepciones que mantuvo al conservatismo neoliberal alejado de los discursos sobre redistribución del ingreso y consolidación de la vocación integracionista. Los triunfos de nuevos líderes progresistas como Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y Luis Arce en Bolivia se suman a los liderazgos ya consolidados de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. Siguiendo esa lógica, se rescata el triunfo de Luis Inacio Lula da Silva, tras cuatro años desastrosos en los que más de 688 mil brasileños perdieron su vida por el negacionismo de Jair Bolsonaro durante la pandemia. A esto se

suman las constantes agresiones verbales y discriminatorias hacia las mujeres, afrodescendientes y población LGBTI+ por parte del actual mandatario brasileño. Lula abre caminos amplios de esperanza para retomar el camino perdido de la integración, la libertad y la justicia social en la región.

En buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe el progresismo es hoy gobierno, una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a comienzos de siglo y que fue trascendente en materia de políticas sociales para reducir las brechas. Asimismo, abrió espacios de concertación política a escala regional en una zona habituada a los esquemas de libre comercio, pero no necesariamente al diálogo político y el respeto a la diversidad.

Esta diversidad parece amenazada en todo mundo, donde el tema migratorio ha generado niveles inaceptables de discriminación. Las migraciones son un asunto que debe ser incluido en la regionalización, sin dar la espalda a ninguno de los actores comprometidos en esos flujos y en el ideal de garantizar los derechos de un segmento poblacional que viene en aumento en América Latina y el Caribe. Al contrario, el progresismo debe convertirse en el constructor de una nueva ciudadanía latinoamericana que empiece por reconocer el derecho de las personas que emigran a tener derechos donde quiera que lleguen y cualquiera sea su lugar de origen.

Los temas del diálogo político regional

La región necesita incorporar y enfatizar nuevos temas en la agenda regional que antes, por distintas razones, no tenían la visibilidad que hoy parece indiscutible como las políticas públicas de medio ambiente, la equidad de género, la libre movilidad de las personas, la transición ecológica, la defensa de la selva amazónica y de los derechos los pueblos indígenas, el desarrollo de energías alternativas y la necesidad de incluir nuevos actores sociales y económicos en los procesos regionales de integración. En esta misma dirección la apuesta del Grupo de Puebla debe promover la seguridad y soberanía alimentaria, la gratuidad y calidad de la educación pública, así como una política de seguridad y defensa común.

América Latina y el Caribe necesitan relanzar una arquitectura financiera adaptada a sus necesidades y sin imposiciones que amenacen la soberanía de nuestros pueblos y centren la mirada en la creación de una moneda única latinoamericana.

El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional y global. La llamada Guerra contra las drogas, como lo han afirmado diferentes organizaciones y figuras políticas, ha sido un fracaso, y no ha resuelto el problema, sino que lo ha profundizado. Los principales países consumidores, deben asumir su responsabilidad en buscar una salida distinta al problema. Por eso, proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una salida distinta consistente en buscar salidas de desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario y no exclusivamente penal a la adicción y al consumo.

El Grupo de Puebla debe convertir su Manifiesto lanzado en febrero de 2021, en una serie de iniciativas concretas que tengan impacto en el bienestar de latinoamericanos y caribeños. Para ello, se propuso en diciembre pasado, un Modelo Solidario de Desarrollo cuyos ejes articuladores sean i) la búsqueda de la igualdad como valor central del desarrollo y la reducción de las asimetrías globales ii) la búsqueda del valor iii) una nueva política económica, diversificada y basada en la incorporación del conocimiento iv) la transición ecológica v) una nueva institucionalidad democrática y, vi) la integración regional.

El Modelo apunta a la reducción de las profundas asimetrías observables tras la pandemia y que no habían sido suficientemente dimensionadas. Las brechas son múltiples, por ende, el reto es complejo. Ello requiere de una política de generación de valor que vaya abandonado la distinción engañosa entre lo público y lo privado y la idea de que Estado y mercado van cada uno por su lado. Se trata de contar con Estados emprendedores que generen bienestar social a través de la creación de cadenas incluyentes de valor, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas y la reindustrialización y *reprimarización* de sus economías. Nuestros gobiernos necesitan reivindicar la soberanía alimentaria en todo momento y en especial en tiempos de guerra, incertidumbre y ante la riesgosa posibilidad de una *desglobalización* con efectos devastadores sobre el Sur Global. Como parte de este replanteamiento, el Grupo de Puebla condena la imposición de medidas coercitivas y sanciones unilaterales que llevan a bloqueos económicos como los que padecen Cuba y Venezuela. Ningún país puede atribuirse el derecho de sancionar a otro y mucho menos afectar las posibilidades de supervivencia de sus pueblos.

La generación y transferencia de conocimiento son esenciales, y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones desempeñan un papel vital. Las redes sociales y los medios de comunicación, espacios clave de la deliberación, en determinados casos

se han convertido en generadores de noticias falsas, reproductores de la violencia de género e informaciones imprecisas, e incluso estando al servicio de causas políticas de dudoso carácter democrático.

Urge también una renovada lectura sobre el medio ambiente. Frente al cambio climático vale recordar que, entre 1998 y 2020 más de 312.000 personas perdieron la vida por hechos relacionados con desastres naturales de acuerdo con las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe concentran 57% de los bosques primarios del planeta. A esto se añade la necesidad de discutir la transición energética como parte de un nuevo modelo de desarrollo solidario que tenga en consideración las afectaciones al medio ambiente y a la supervivencia que los modelos *extractivistas* nos han dejado. Y la inaplazable necesidad de poner en vigor el Acuerdo de Escazú que, entre otros, impulsa la protección de los líderes ambientales (en la región de mayor riesgo para su vida) y entrega instrumentos de seguimiento al Estado y la sociedad sobre los compromisos mínimos en materia de protección ambiental.

El Grupo de Puebla se define como feminista y hace propias las justas reivindicaciones de las mujeres y el movimiento LGTBQ+ en distintos lugares del mundo. Hace expresa su voluntad de contribuir a la lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de género. Se declara, por tanto, partícipe de su lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, desde una perspectiva popular e interseccional. No hay progresismo, ni democracias sanas sin la participación activa de las mujeres y la comunidad LGTBQ+ en los espacios de poder político y de toma de decisiones. Por tanto, el enfoque de género debe ser elemento constitutivo de las propuestas programáticas del progresismo y sus gobiernos. Además, asumimos el desafío de incorporar los temas de género y equidad en nuestros diálogos y reflexiones, no solo desde las mujeres, sino como conjunto de nuestro grupo, incorporando el criterio de paridad en todos nuestros espacios de trabajo.

Si bien la época de las dictaduras militares parece cosa del pasado, las amenazas al Estado de derecho siguen estando presentes bajo la figura de las guerras jurídicas (*lawfare*), el desconocimiento de los resultados de las elecciones o la utilización de los poderes públicos para llevar a cabo golpes blandos. Todo ello requiere de la generación de conciencia sobre los riesgos que entraña la *judicialización de la política* que lleva a la *politización de la justicia*. Puebla debe promover la defensa de la independencia de las ramas del poder público, pues en esa autonomía se juega en buena medida el destino

de nuestra democracia, cada vez más amenazada por poderes fácticos que acumulan prerrogativas sin que hayan sido elegidos ni rendir cuentas por sus acciones.

La región sigue observando procesos penales, juicios de contenido político y la guerra jurídica bajo el pretexto derivado de la lucha contra la corrupción como justificación, disfrazada de legalidad, para suprimir del juego político los liderazgos progresistas, como ha ocurrido en contra de Cristina Fernández, Rafael Correa, Carlos Caicedo, Luis Inácio Lula da Silva, Evo Morales y Marco Enríquez-Ominami, entre otros. Esta estrategia resultó en golpes parlamentarios y en transiciones hacia Estados autoritarios y de extrema derecha en nuestra región, bajo los cuales se producen cotidianamente suspensiones de derechos y usos estratégicos de mecanismos legales para perseguir proyectos políticos populares y tomar retaliaciones injustamente contra la oposición o contradictores políticos. Destacamos los esfuerzos del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) para visibilizar el lawfare y trabajar infatigablemente por la soberanía latino americana y por el respeto a los derechos humanos.

El Grupo de Puebla recomienda a los gobiernos de los diferentes países, independientemente de sus posiciones políticas-ideológicas, profundizar los procesos de integración que nos permitan resolver de forma articulada los problemas de nuestros pueblos enfrentado por una guerra que afecta a nuestros países y la necesidad de responder conjuntamente a los problemas del mundo contemporáneo

Vemos con genuina esperanza la “paz total” en Colombia que acabe con la guerra que, durante décadas ha entorpecido las posibilidades de un desarrollo pleno y de justicia social. Apoyamos este enfoque que ataca las causas objetivas y sociales de la violencia y tal como sucedió con el Acuerdo de La Habana, confirma que el único camino para esa anhelada paz es la negociación y la concertación incluyendo a todos los actores.

La Organización de Estados Americanos, señala en su Carta, que tiene la misión de articular para sus países miembros, los principios de solución pacífica de las controversias y de no intervención en asuntos internos. Sin embargo, vemos con inquietud que su secretario general, Luis Almagro, ha promovido consistentemente lo contrario: la intervención extranjera, la obstaculización de procesos de acuerdos y de paz, y la oposición sistemática al actuar soberano de los pueblos. Denunciamos, nuevamente, su rol en la desestabilización de las democracias latinoamericanas y caribeñas al que se suman ahora, denuncias de abuso de poder. Esperamos que los Estados exijan su renuncia.



Las respuestas a este conjunto variopinto de desafíos están en la integración, más aún, cuando el progresismo ha vuelto al poder en buena parte del continente. Las secuelas sociales del último ciclo de gobiernos neoliberales son inocultables en materia de medio ambiente, desigualdades, maltrato infantil, violencia de género, polarización y transgresiones al Estado de derecho. Transformar semejante escenario es uno de los desafíos más difíciles, pero urgentes para este progresismo renovado que debe restablecer los espacios de diálogo político regional cuanto antes. Este cambio no puede hacer abstracción de lo local pues en esos territorios se construye la democracia, desde la base. Más aún, siendo América Latina una zona rica en experiencias de democracia local con la cogestión, los presupuestos participativos o la planeación participativa donde la vocación progresista ha sido evidente incluyendo la promoción de procesos de autonomía territorial, regionalización o federalización según las condiciones de cada país.

Necesitamos más integración y diálogo político. Con el nuevo panorama en Brasil se despeja el camino para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y para la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Ambos espacios fueron debilitados y casi desmontados cuando los gobiernos conservadores fueron mayoría. Sin embargo, su permanencia no puede depender de los cambios de gobierno, pues son espacios indispensables para la concertación regional. América Latina necesita resignificar a Unasur y fortalecer la Celac y que, de paso, se relance el proyecto de convergencia que presupone la articulación de otras iniciativas regionales como la Comunidad Andina. El Grupo de Puebla recomienda a los gobiernos de los diferentes países, independientemente de sus posiciones políticas-ideológicas, profundizar los procesos de integración que nos permitan resolver de forma articulada los problemas de nuestros pueblos. Finalmente, el Grupo de Puebla recoge el sentimiento que expresan el ecologismo, el feminismo y el movimiento juvenil de la región como sujetos históricos en la construcción de las nuevas agendas de cambio.

Este encuentro del Grupo de Puebla en la ciudad de Santa Marta, morada del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, constituye un esfuerzo en ese sentido, y ha congregado a distintas voces de un progresismo latinoamericano y caribeño, cada vez más diverso, para unirnos e integrarnos para el cambio.